

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.
Es copia que certifico. México, Abril 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por D. Juan G. Alcázar, como apoderado de los reos de homicidio Roman Terrones, Feliciano Bustos, Clemente Echeverría, Francisco Padilla, y Felipe Alvarez, contra el C. juez 2º de 1ª instancia, que los juzga, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

La ley de amparos en que trata de apoyarse el C. Juan G. Alcázar, para la defensa de los reos de homicidio contra Casimiro Diaz, no establece el absurdo principio de que los Tribunales de la Federacion, conozcan de asuntos en que tiene que hacerse una declaracion general, como en el caso presente. Esa ley se limita á proteger á los individuos por actos arbitrarios de autoridades que infrinjan las garantías otorgadas en el Código político de la República, pero no se estiende, ni puede estenderse, á impedir que las faltas de aquellos dejen de juzgarse ante quien corresponda, por el hecho de que se niegue origen legítimo á las autoridades de un Estado.

Tal género de conducta, en ningun modo puede conducir á obtener sentencias cuyo efecto sea el de la ley de 20 de Enero de 1869, que se invoca por el actor, supuesto que ella se ocupa solo de individuos particulares, amparándolos

Tomo III.—Parte II.

y protejiéndolos en el caso especial sobre que versa el proceso.

En esa virtud, y no importando la ley espresada el desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas, el que suscribe encuentra fundada la escusa del C. juez 2º de 1ª instancia de esta capital, con motivo de sus procedimientos en el juicio que sigue contra Roman Terrones, y cómplices.

Pido pues al C. juez de Distrito, se sirva desechar de plano el recurso de amparo que solicita el C. Juan G. Alcázar, imponiéndole la multa que señala el art. 16 de la misma ley de 20 de Enero de 1869.

Aguascalientes, 5 de Febrero de 1873.—*I. Ocádiz.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, Febrero 5 de 1873.—*Diego Ortigoza*

SENTENCIA del C. juez de Distri

Aguascalientes, 17 de Marzo de 1873.
—Vistos: Apareciendo que D. Juan G. Alcázar, en representacion de Roman Terrones, Feliciano Bustos, Clemente Echeverría, Francisco Padilla y Felipe Alvarez, con el poder amplio que estos le confirieron, solicitó en escrito de 18 de Enero último, que la Justicia de la Union amparase á sus comitentes contra los procedimientos judiciales del Sr. juez 2º de 1ª instancia de esta capital, Lic. D. Rafael Diaz, que con tal carácter conoce en la causa que contra Terrones y socios está instruyendo, por delito de homicidio cometido en la persona de Casimiro Diaz, á quien fusilaron en el camino que va de esta misma capital á Paso de Sotos, fundando el Sr. Alcázar su peticion, en la ilegitimidad de los altos funcionarios del Estado, de quienes ha dependido el nombramiento

del Sr. juez contra quien pretende sean amparados sus representados, para lo cual alega, la nulidad ó ilegalidad de las elecciones de aquellos propios funcionarios, con lo cual se han vulnerado varios artículos de la Constitución particular del Estado, y el 41 y 16 de la general de la República: Visto el poder en virtud del cual ha gestionado el Sr. Alcázar y corre á fojas 6 y 7 de estos autos: Visto el informe del relacionado Sr. juez 2º al que acompaña el decreto número 175 de la Legislatura, fecha 15 de Junio del año próximo pasado, que corre á fojas 9 en que se declara gobernador al Sr. Chavez por un período que en él se demarca: Visto el pedimento de la voz fiscal en que se solicita, se niegue el recurso promovido por el apoderado de Terrones y socios: Vistas las pruebas producidas por el referido Sr. Alcázar entre las que son de notarse, la Constitución particular del Estado; varios decretos relativos á elecciones que corren impresos en diferentes números del periódico oficial del Estado y se hallan agregados en union de las protestas emitidas por la Legislatura y gobernador que funcionaron en la administración pasada; y visto en fin, el alegato último del Sr. Alcázar, que corre de fojas 46 á la 49 de estos autos, con todo lo demás que de ellos resulta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que á primer golpe de vista se nota, que el poder con que ha gestionado el promovente, carece del requisito del bastanteo que tan singularmente requiere la ley 22, título 32, libro 11 de la Novísima Recopilación; pero que ya una vez admitido por el Sr. juez que sustanció el recurso, el que suscribe no puede menos que tomarlo en consideración para pronunciar sentencia.

Considerando á la vez: que el Sr. Alcázar, al solicitar el amparo de la Justicia Federal en favor de sus representados, lo hace, fundándose en la ilegiti-

dad de los funcionarios del Estado, especialmente del Sr. Gobernador, de quien ha emanado el nombramiento del Sr. juez que conoce de la causa que se anima por homicidio contra los que quieren ser amparados, para lo cual, intenta hacer valer la historia de las elecciones que no se verificaron en Agosto de 1871, y la de las que se verificaron despues, en que resultó electo para aquel cargo el Sr. D. Ignacio Chavez, en cuyas elecciones asegura se violaron varios artículos de la Constitución particular del mismo Estado y el 11 de la Carta Federal de la República, para deducir de aquí que se han violado tambien las garantías que otorga el art. 16 de la propia Carta, procesando á los que fusilaron á Casti-miro Diaz; pero sin advertir el promovente, que el art. 41 que cita, claramente determina el fuero general de la federación y el particular de los Estados, cuya unidad es preciso conservar, porque de lo contrario y como dice un autor moderno (Dr. Luis Fernando Rivero), en sus "Lecciones de política segun los principios de sistema popular representativo, adoptado para las Naciones Americanas," y cuyas doctrinas son muy aplicables en el caso que nos ocupa, esto presentaria, lee, infinitos subterfugios, dilaciones, y arbitrariedades ingeniosas á los litigantes temerarios, á los jueces lentos ó poco de leños y á los ministros de justicia que querian poner á logro el inmenso caudal de su cobilosa sagacidad, para venir á establecer un conflicto de autoridades, que anularia el imperio de la ley y aseguraria la impunidad de los delitos. Precisamente debia de suceder todo esto; si efectivamente se amparara á los comitentes del Sr. Alcázar, pues mas de cuatrocientos reos que hay en las cárceles del Estado, se ampararian tambien por iguales razones á las que espone y habia la necesidad de ponerlos á todos en libertad absoluta, quedando impunes no solo los delitos que estos

han cometido, sino tambien los que siguieran cometiéndose, por falta de autoridades ó empleados que legalmente pudieran hacer la aprehension de los reos, y por falta de jueces que pudieran castigarlos, hasta que de hecho llegara el caso que hubiera funcionarios legalmente constituidos, segun quiere el promovente, en lo que necesariamente debe transcurrir un tiempo incalculable y en el que la sociedad tendria que sufrir trastornos y desastres de gran magnitud, sin que fuera posible despues reaprehender á los delincuentes, ni menos, aplicarles el castigo á que se hubieran hecho acreedores.

Considerando por otra parte: que este Juzgado no tiene facultades para resolver sobre la ilegalidad de las elecciones á que alude el Sr. Alcázar; ni sobre la legalidad de los funcionarios que de ellas emanaron. En primer lugar; porque de los actos electorales, solo deben conocer los colegios respectivos y los congresos en los casos que detalladamente demarcan las leyes relativas. En segundo lugar, porque este seria un poder tan extraordinario y culminante, que ejercido por los jueces de la Federacion, atacaria las libertades públicas, minaria la soberania de los Estados y podria tal vez, segun sus intereses, hacer sobreponerse una insignificante minoria, un partido que profesase principios bastardos y aun contrarios á los que la nacion tiene adoptados que producirian un trastorno. En tercer lugar, porque lo que pretende el Sr. Alcázar, importaria nada menos que una resolucion ó declaracion general que este Juzgado ni puede, ni debe darla, porque echaria sobre sí una responsabilidad muy grande violando el art. 102 de la Carta Federal que prohibe hacer tales declaraciones, debiendo solo ocuparse de individuos particulares. Y por último: porque ya está expresamente declarado por uno de los poderes supremos de la nacion, que los jueces de Distrito

carecen de esa facultad; como puede verse en la sentencia que en 2 de Diciembre de 1871, pronunció la Suprema Corte de Justicia y corre impresa en varios periódicos y en el "Semanario Judicial," tomo 2º, página 488 donde dice: "que á los jueces de Distrito no les toca examinar y menos decidir sobre la legitimidad de las autoridades que funcionan, porque esta ingerencia seria una violacion espresa del art. 40 del Código de la República."

Considerando al mismo tiempo: que el Sr. Lic. D. Rafael Diaz, en su informe visible á fojas 8 manifiesta, que debe su nombramiento como juez al Sr. Gobernador del Estado y que con tal carácter conoce de la causa que por homicidio se instruye contra el ya citado Terrones y sus cómplices, en lo cual hay que notar, tanto la conformidad de la parte promovente sobre estos puntos, como que debiendo el Sr. Diaz su nombramiento al gobierno del Estado, se halla en el art. 101, de la Constitucion particular del mismo que corre de la foja 14 á la 29 de este expediente, por lo cual, ni aun puede decirse que ese funcionario sea incompetente para conocer de un delito comun, como el que han cometido los que por voz de su representante pretenden ser amparados; y bajo este concepto, si atendemos á que el Sr. Lic. Diaz tiene, y no le niega el Sr. Alcázar los requisitos que para ejercer la judicatura que desempeña exige la disposicion constitucional referida, no podemos menos de convenir, en que es juez competente para juzgar á Terrones y sus socios; y por lo mismo, tampoco puede decirse que por falta de competencia se han violado las garantías que otorga el art. 16 de la Constitucion Federal, pues esta disposicion exige solo la competencia de la autoridad, y ya se deja entender que hay una gran diferencia entre la legalidad y la competencia de

han cometido, sino tambien los que siguieran cometiéndose, por falta de autoridades ó empleados que legalmente pudieran hacer la aprehension de los reos, y por falta de jueces que pudieran castigarlos, hasta que de hecho llegara el caso que hubiera funcionarios legalmente constituidos, segun quiere el promovente, en lo que necesariamente debe trascurrir un tiempo incalculable y en el que la sociedad tendria que sufrir trastornos y desastres de gran magnitud, sin que fuera posible despues reaprehender á los delinquentes, ni menos, aplicarles el castigo á que se hubieran hecho acreedores.

Considerando por otra parte: que este Juzgado no tiene facultades para resolver sobre la ilegalidad de las elecciones á que alude el Sr. Alcázar; ni sobre la legalidad de los funcionarios que de ellas emanaron. En primer lugar; porque de los actos electorales, solo deben conocer los colegios respectivos y los congresos en los casos que detalladamente demarcan las leyes relativas. En segundo lugar, porque este seria un poder tan extraordinario y culminante, que ejercido por los jueces de la Federacion, atacaria las libertades públicas, minaria la soberania de los Estados y podria tal vez, segun sus intereses, hacer sobreponerse una insignificante minoria, un partido que profesase principios bastardos y aun contrarios á los que la nacion tiene adoptados que producirian un trastorno. En tercer lugar, porque lo que pretende el Sr. Alcázar, importaria nada menos que una resolucion ó declaracion general que este Juzgado ni puede, ni debe darla, porque echaria sobre sí una responsabilidad muy grande violando el art. 102 de la Carta Federal que prohibe hacer tales declaraciones, debiendo solo ocuparse de individuos particulares. Y por último: porque ya está espresamente declarado por uno de los poderes supremos de la Union, que los jueces de Distrito

carecen de esa facultad; como puede verse en la sentencia que en 2 de Diciembre de 1871, pronunció la Suprema Corte de Justicia y corre impresa en varios periódicos y en el "Semanario Judicial," tomo 2º, página 488 donde dice: "que á los jueces de Distrito no les toca examinar y menos decidir sobre la legitimidad de las autoridades que funcionan, porque esta ingerencia seria una violacion espiciosa del art. 10 del Código de la República."

Considerando al mismo tiempo: que el Sr. Lic. D. Rafael Diaz, en su informe visible á fojas 8 manifiesta, que debe su nombramiento como juez al Sr. Gobernador del Estado y que con tal carácter conoce de la causa que por homicidio se instruye contra el ya citado Terrones y sus cómplices, en lo cual hay que notar, tanto la conformidad de la parte promovente sobre estos puntos, como que debiendo el Sr. Diaz su nombramiento al gobierno del Estado, se ha llenado el art. 101, de la Constitucion particular del mismo que corre de la foja 14 á la 29 de este expediente, por lo cual, ni aun puede decirse que ese funcionario sea incompetente para conocer de un delito comun, como el que han cometido los que por voz de su representante pretenden ser amparados; si atendemos á que el Sr. Lic. Diaz tiene, y no le niega el Sr. Alcázar los requisitos que para ejercer la judicatura que desempeña exige la disposicion constitucional referida, no podemos menos de convenir, en que es juez competente para juzgar á Terrones y sus socios; y por lo mismo, tampoco puede decirse que por falta de competencia se han violado las garantías que otorga el art. 16 de la Constitucion Federal, pues esta disposicion exige solo la competencia de la autoridad, y ya se deja entender que hay una gran diferencia entre la legalidad y la competencia de

en la causa que por homicidio les instruye.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 22 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por los CC. Diputados Macario Hidalgo y Florencio Santa María, contra un decreto de la legislatura de Querétaro de 24 de Febrero de este año que exonera á los quejosos del cargo de diputados por la renuncia que se supone hicieron de ese cargo por haber sido electores en la eleccion de presidente y tercero y octavo Magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María solicitan el amparo de la Justicia Federal contra el decreto núm. 187 de la legislatura, que los exonera del cargo de diputados al Congreso del Estado, en virtud de una supuesta renuncia que, se dice, han hecho conforme al art. 134 de la Constitución del Estado, que á la letra es: "Ningun individuo puede desempeñar á la vez dos ó mas encargos de

eleccion popular; pero el nombrado puede elegir el que quiere desempeñar, entendiéndose renunciados los demas. Jamas podrian reunirse en un mismo ciudadano dos empleos ó destinos por los que se disfrute sueldo, exceptuando el ramo de instruccion pública."

El cargo que los quejosos han desempeñado se reduce á la funcion electoral para Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; y siendo esa funcion el desempeño de una obligacion federal transitoria, es indudable que no está comprendida en el artículo copiado.

Como la privacion de un cargo de eleccion popular importa una pena, cuya imposicion toca á la autoridad judicial, en el caso se han violado los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución federal.

Los artículos 101 y 102 de la misma cometen á los tribunales de la Federacion el cuidado de velar por la conservacion de las garantías individuales, y es flagrante esa violacion.

No se necesita mucho esfuerzo para comprender que la legislatura ignora ó finge ignorar el espíritu del art. 134 de la Constitución del Estado. Los cargos de eleccion popular de que allí se habla son empleos ó oficios cuyo desempeño continuo y simultáneo impida el buen servicio público. No se trata ni podría tratarse de comisiones accidentales y pasajeras que no son incompatibles con otras funciones permanentes. Fácil es tambien advertir que aun suponiendo exacta la interpretacion que los diputados han dado á dicho artículo, este solo podia aplicarse á funciones del Estado y no á las de la federacion. Cualquiera, en fin, nota á primera vista que ese artículo constitucional no importa el desafuero de los representantes del pueblo en el cuerpo legislativo, ni la trasgresion de los principios tutelares de todo enjuiciamiento.